

## SEPTIEMBRE 27 DE 1919

### 45.<sup>a</sup> REUNIÓN — Continuación de la 27.<sup>a</sup> sesión ordinaria

PRESIDENCIA DE D. LUIS GARCIA

Senadores presentes: Albarracín, Caballero, Castañeda Vega, Esteves, Gallo, García, Garro, González, Iturbe, Larlús, Linares, Llanos, Melo, Patrón Costas, Roca, Saguier, Soto, Torino, Vidal, Villanueva, Zabala.

Senadores ausentes con aviso: Del Valle Iberlucea, Iturraspe.

#### SUMARIO

- 1.—Asuntos entrados.
- 2.—Moción de preferencia del señor senador Linares, sobre el despacho de la comisión de hacienda referente a la creación del **Instituto del Radio**; se aprueba. Del señor senador Llanos sobre el despacho de la comisión de instrucción pública creando la **Universidad del Litoral**. Se resuelve continuar el orden de preferencias.
- 3.—Se aprueba el proyecto de ley en revisión sobre el **Codex Medicamentarium**.
- 4.—Consideración de las leyes complementarias del censo sobre obras de fomento en las provincias del Norte y del Oeste. (Compañía nacional de ferrocarriles y obras de irrigación). Se resuelve insistir en la primitiva sanción.
- 5.—Se aprueba el despacho de la comisión de instrucción pública en el proyecto de ley en revisión creando la **Universidad del Litoral**.
- 6.—Se aprueba el despacho de la comisión, referente al proyecto de ley en revisión, sobre **Patronato de Menores**.
- 7.—Se aprueban los despachos de la comisión de negocios constitucionales concediendo **venia para demandar a la nación** a Alfredo Bertelli; Agustín Arroyo, Manuel Ramírez Sanguinetti, José Itúa, María Brid de Arrieta, Leticia A. Becce.
- 8.—Se aprueban los despachos de la comisión de peticiones, concediendo a la "**Sociedad Italiana de tiro a Segno**" una **medalla de oro** para el concurso re reservistas.
- 9.—Se aprueba otro despacho de la comisión de peticiones, computando los servicios prestados en el orden provincial a los efectos de la **jubilación al señor Máximo S. Victoria**.
- 10.—A indicación del señor senador doctor Vicente C. Gallo, el honorable senador resuelve considerar como **definitivamente sancionados los proyectos de ley en revisión, concediendo pensiones** a varias personas en una ley, y que la comisión de peticiones despachó favorablemente haciendo una ley para cada una; asimismo se resuelve mandar retirar las **comunicaciones** que se hubieran hecho a la cámara de diputados y que no hayan sido consideradas por ese cuerpo.
- 11.—Se aprueban varios despachos de las comisiones de peticiones y guerra sobre **pensiones**.
- 12.—Se aprueba otro despacho de la comisión de peticiones, otorgando un **premio** para el concurso de reservistas del **Tiro Federal Argentino**.

la cultura argentina. Sin embargo, no debe de ser tan fácil la cuestión que se ha abordado, cuando ha tenido que divagar por Norte América, por Francia, etc., y para que nada falte, ha recordado hasta los encantos de las sierras solitarias de La Rioja. Yo no sé a qué viene, señor presidente, la cita del artículo 7 de la constitución nacional, que se refiere a la autenticación de los actos públicos de las provincias para que hagan fe fuera de ellas. Tampoco sé a qué viene la cita del artículo 31, que enumera lo que debe considerarse como ley suprema de la Nación; y tampoco me explico la cita del artículo 108 de la misma constitución en el que se enumera, sin que su enumeración sea restrictiva, lo que deben hacer las provincias y cuales son las facultades de la Nación. Lo que aquí, se discute, es, sencillamente, el alcance preciso del inciso 16, del artículo 67, y desgraciadamente el señor senador por La Rioja, que es maestro en esta materia, no me ha convencido que tenga un alcance distinto al que le atribuyo.

Yo no he dicho en ningún momento, señor presidente, que no sea ventajoso para el país que las provincias coope ren a los sacrificios que hace la nación en la creación de centros de alta cultura científica; no he dicho que entrañe un peligro que las provincias coadyu ven a ese propósito; tampoco he dicho que los que ejercen la profesión en las provincias estén en condiciones inferiores a los que ejercen en los centros populares como esta capital. Yo, como lo dije en mi informe, he partido de una base completamente distinta, reconociendo a todos los que han salido de la facultad de Santa Fe, la misma competencia que puedan ostentar los egresados de las demás facultades nacionales.

Lo que aquí está en cuestión, señor presidente, es saber si esos centros de cultura, creados y sostenidos por las provincias, que expiden títulos con carácter nacional, pueden ser declarados válidos por una ley del congreso, y si este congreso tiene esa facultad para expedir títulos de suficiencia. Y la-

mento tener que manifestar que la argumentación del señor senador por La Rioja, que la he atendido con todo gusto, no haya llegado a convencerme que tenga esa atribución el congreso nacional.

No quiero distraer más la atención de esta cámara y doy por terminada esta breve exposición.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo 9.º.

—Se vota y aprueba, así como el resto del proyecto.

6

### PATRONATO DE MENORES

**Sr. Presidente.** — Corresponde tratar ahora el despacho de la comisión de legislación sobre Patronato de Menores.

**Sr. Secretario (Ocampo).** — En la misma orden del día número 22 quedan pendientes varios asuntos.

**Sr. Villanueva.** — Pido la palabra.

Hago moción para que la presidencia, si es que no lo ha hecho ya, comuniqué, sin necesidad de levantar la sesión, la aprobación del censo y de las demás leyes complementarias.

**Sr. Presidente.** — Acaban de ser comunicadas, señor senador.

—Se lee:

*Honorable senador:*

La comisión de legislación ha tomado en consideración el proyecto de ley venido en revisión, relativo al patronato del Estado, sobre los menores; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja le prestéis vuestra aprobación.

Sala de la comisión, 23 de septiembre de 1919.

Vicente C. Gallo. — Julio A. Ro ca. — Octavio Iturbe.

### PROYECTO DE LEY

*El senado y cámara de diputados de la Nación Argentina, etcétera.*

Artículo 1.º — Derógase el artículo 264 del código civil y sanciónase en su reemplazo el siguiente:

Art. 264. — La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que

corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos desde la concepción de éstos y en tanto sean menores de edad y no se hayan emancipado.

El ejercicio de la patria potestad de los hijos legítimos corresponde al padre; y en caso de muerte de éste o de haber incurrido en la pérdida de la patria potestad o del derecho de ejercitarla, a la madre. El ejercicio de la patria potestad del hijo natural corresponde a la madre o al que reconozca al hijo o a aquel que haya sido declarado su padre o su madre.

Art. 2.º — Derógase el artículo 306 del código civil y sanciónase en su reemplazo el siguiente:

Art. 306. — La patria potestad se acaba:

- 1.º Por la muerte de los padres o de los hijos.
- 2.º Por profesión de los padres, o de los hijos, con autorización de aquéllos, en institutos monásticos.
- 3.º Por llegar los hijos a la mayor edad.
- 4.º Por emancipación legal de los hijos.

Art. 3.º — Deróganse los artículos 307, 308, 309 y 310 del código civil y sanciónase en su reemplazo los siguientes:

Art. 307. — La patria potestad se pierde:

- 1.º Por delito cometido por el padre o madre contra su hijo o hijos menores, para aquel que lo cometa.
- 2.º Por la exposición o el abandono que el padre o madre hiciera de sus hijos, para el que los haya abandonado.
- 3.º Por dar el padre o la madre a los hijos, consejos inmorales o colocarlos dolosamente en peligro material o moral, para el que lo hiciera.

Art. 308. — El padre o la madre que haya sido condenado por delito grave o que haya sido objeto de varias condenas que demuestren que se trata de un delincuente profesional o peligroso, pierde el ejercicio de la patria potestad. La madre que contrajere nuevas nupcias pierde el ejercicio de la patria potestad de los hijos de los matrimonios anteriores, pero enviudando lo recupera.

Art. 309. — El ejercicio de la patria potestad queda suspendido en ausencia de los padres ignorándose su paradero, y por incapacidad mental, en tanto dure la ausencia o la incapacidad. Los jueces pueden suspender el ejercicio de la patria potestad si el padre o la madre tratasen a sus hijos, sin motivo, con excesiva dureza, o si por consecuencia de su ebriedad consuetudinaria incooducta notoria o negligencia grave, comprometiesen la salud, seguridad o moralidad de los hijos. Esa suspensión puede durar desde un mes has-

ta que el hijo menor llegue a la mayor edad.

Art. 310. — En los casos de pérdida de la patria potestad (art. 307) o de su ejercicio (art. 308), los menores quedan bajo el patronato del estado nacional o provincial. En los casos de suspensión (artículo 309) quedan, durante ésta, también bajo el patronato del estado nacional o provincial.

Art. 4.º — El patronato del estado nacional o provincial se ejercerá por medio de los jueces nacionales o provinciales, con la concurrencia del ministerio público de menores. Ese patronato se ejercerá atendiendo a la salud, seguridad, educación moral e intelectual del menor, proveyendo a su tutela sin perjuicio de lo prescrito en los artículos 390 y 391 del código civil.

Art. 5.º — Derógase el artículo 329 del código civil y sanciónase en su reemplazo el siguiente:

Art. 329. — Lo dispuesto en los artículos 306, 307, 308 y 309 del código civil se aplicará a la patria potestad de los hijos naturales, sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 330 del mismo código.

Art. 6.º — Modifícase el artículo 393 del código civil en la siguiente forma:

Art. 393. — Los jueces no podrán proveer la tutela, salvo que se tratase de menores sin recursos o de parientes de los mismos jueces, en socios, deudores o acreedores suyos, en sus parientes dentro del 4.º grado, en amigos íntimos suyos o de sus parientes hasta dentro del 4.º grado; en socios, deudores o acreedores, amigos íntimos o parientes dentro del 4.º grado de los miembros de los tribunales nacionales o provinciales, que ejercieran sus funciones en el mismo lugar en que se haga el nombramiento, ni proveerla dando a una misma persona varias tutelas de menores de diferentes familias, salvo que se tratase de filántropos reconocidos públicamente como tales.

Art. 7.º — Derógase el artículo 457 del código civil y sanciónase en su reemplazo el siguiente:

Art. 457. — Los jueces podrán remover los tutores por incapacidad o inhabilidad de éstos, por no haber formado inventario de los bienes del menor en el término y forma establecidos en la ley y porque no cuidasen debidamente de la salud, seguridad y moralidad del menor que tuviesen a su cargo, o de su educación profesional, o de sus bienes.

Art. 8.º — Todo menor confiado por sus padres, tutores o guardadores a un establecimiento de beneficencia privado o público quedará bajo tutela definitiva de la dirección de ese establecimiento.

Art. 9.º — Los menores sobre cuya situación se haya dispuesto de acuerdo con los artículos anteriores, quedarán bajo la

vigilancia del defensor de menores, quien deberá controlar la acción, de los respectivos tutores o guardadores e inspeccionar, por lo menos cada trimestre, los establecimientos privados o públicos respectivos, atender las reclamaciones de los menores y poner en conocimiento del juez lo que juzgue conveniente.

Art. 10. — Las denuncias sobre los hechos mencionados en los artículos anteriores podrán ser presentadas a los defensores de menores, por cualquier persona capaz, debiendo el defensor iniciar una información sumaria y someterla al ministro público de menores para la iniciación del juicio, en el cual deberá ser citado el defensor de menores a efectos informativos.

Art. 11. — Cuando el juez lo considere conveniente, la resolución podrá limitarse a la privación de la tenencia del menor, y en tal caso, podrá ser entregado a una persona, pariente o no, o al defensor de menores.

Art. 12. — Los padres privados del ejercicio de la patria potestad o suspendido en él, o de la tenencia de sus hijos en virtud de esta ley, podrán solicitar que la medida se deje sin efecto, si hubieren transcurrido dos años desde la resolución definitiva y probaren que se hallan en situación de ejercer convenientemente sus obligaciones.

Art. 13. — La pérdida de la patria potestad, la suspensión de su ejercicio o la pérdida de la tenencia de los hijos en virtud de esta ley, no importa liberar a los padres de las obligaciones impuestas por los artículos 265, 267 y 268 del código civil, si no fueren indigentes. A ese efecto el juez establecerá el monto de los alimentos y la forma de suministrarlos.

Art. 14. — Los jueces de la jurisdicción criminal y correccional, en la capital de la república y en las provincias y territorios nacionales, ante quien comparezca un menor de diez y ocho años acusado de un delito o como víctima de un delito, podrán disponer preventivamente de ese menor, si se encuentra, material o moralmente abandonado o en peligro moral, entregándolo a una persona honesta, pariente o no, o a un establecimiento de beneficencia privado o público, o a un reformatorio público de menores. A ese efecto, no regirán en los tribunales federales, ordinarios de la capital y de los territorios nacionales, las disposiciones legales sobre prisión preventiva, la que sólo será decretada cuando el juez lo juzgue necesario, y se cumplirá dónde y cómo el mismo lo indique. Podrán también dejarlos a sus padres, tutores o guardadores, bajo la vigilancia del tribunal.

La resolución judicial será susceptible de los recursos de revocación y apelación, en las mismas condiciones prescritas en el artículo 19.

Art. 15. — Los mismos jueces, cuando sobresean, provisoria o definitivamente, respecto a un menor de diez y ocho años, o cuando lo absuelvan, o cuando resuelvan definitivamente en un proceso en que un menor de diez y ocho años haya sido víctima de un delito, podrán disponer del menor por tiempo indeterminado y hasta los veinte y un años, si se hallare material o moralmente abandonado, o en peligro moral, y en la misma forma establecida en el artículo anterior.

Art. 16. — Los jueces correccionales en la justicia nacional de la capital y en los territorios nacionales, entenderán en primera y única instancia, en todos los casos de faltas y contravenciones imputadas a menores de 18 años y aplicarán las disposiciones de los artículos anteriores.

Art. 17. — Todo menor de que hayan dispuesto los jueces indicados, en los tres artículos anteriores, quedará bajo su vigilancia exclusiva y necesaria.

Art. 18. — Los mismos jueces, en los procesos a que se refiere el artículo 14, podrán imponer en cada caso a los padres, tutores o guardadores que aparezcan culpables de malos tratos, o de negligencia grave o continuada con respecto a los menores a su cargo y que no importen delitos del derecho penal, multas hasta la suma de doscientos pesos o arresto hasta un mes, o ambas penas a la vez. Estas condenas podrán suspenderse si los culpables dieran seguridades de reforma, quedando prescriptas en el plazo de dos años, si no incurrieran en hechos de la misma naturaleza.

Art. 19. — Los padres o tutores de los menores de quienes hayan dispuesto definitivamente los jueces de la jurisdicción criminal o correccional, o que hayan sido condenados en virtud del artículo anterior podrán solicitar revocatoria de esas resoluciones dentro de cinco días de la notificación de las mismas. Esta oposición se substanciará en una audiencia verbal, con las pruebas que ordene el juez o indique el recurrente, si el juez las juzgare pertinentes. La resolución será apelable en relación.

Art. 20. — Los tribunales de apelación en lo criminal y correccional de la justicia nacional ordinaria de la capital y territorios nacionales, designarán, si lo juzgan conveniente, uno o más jueces para que entiendan exclusivamente en sus respectivas jurisdicciones en los procesos en que se acuse a menores de diez y ocho años; reglamentarán la forma de la cooperación policial en los sumarios o informaciones respectivas, la cooperación de los particulares o establecimientos particulares o públicos que se avengan o coadyudar gratuitamente en la investigación y en la dirección y educación de los menores; así como también la forma de la vigilancia que corresponde a los jueces en virtud de lo dispuesto en los artículos 14 y 17.

**Art. 21.** — A los efectos de los artículos anteriores, se entenderá por abandono material o moral, o peligro moral, la incitación por los padres, tutores o guardadores a la ejecución por el menor de actos perjudiciales a su salud física o moral; la mendicidad o la vagancia por parte del menor, su frequentación a sitios inmorales o de juego, o con ladrones o gente viciosa o de mal vivir, o que no habiendo cumplido 18 años de edad vendan periódicos, publicaciones y objetos de cualquier naturaleza que fueren, en las calles o lugares públicos, o cuando en éstos sitios ejerzan oficios lejos de la vigilancia de sus padres o guardadores o cuando sean ocupados en oficios o empleos perjudiciales a la moral o a la salud.

**Art. 22.** — El poder ejecutivo presentará el plan general para la construcción, en la capital y en las provincias y territorios nacionales, de escuelas especiales para los menores expuestos o abandonados y para la detención preventiva de los menores delincuentes o de mala conducta, y la construcción de reformatorios para menores delincuentes o de mala conducta, con imputación a la presente ley.

En éstas escuelas y reformatorios regirá el trabajo de talleres y agrícola como principal elemento educativo de los menores reclusos quienes serán parte en el beneficio pecuniario de esos trabajos. Las colonias — escuelas y las colonias — reformatorios ubicados cerca de las ciudades o en pleno campo serán el tipo preferido de éstas casas de prevención y reforma de los menores.

**Art. 23.** — Los asilos, escuelas primarias gratuitas, generales y especiales y particularmente las de práctica técnica, como los demás establecimientos de beneficencia privados, que reciban niños subvencionados por el estado, están obligados a recibir en secciones que podrán ser especiales, un número determinado de menores, remitidos por los jueces en virtud de ésta ley, de acuerdo con la subvención recibida, la naturaleza del establecimiento y la reglamentación que establezca el poder ejecutivo.

**Art. 24.** — Los parientes de los menores y las instituciones de beneficencia o de patronato de niños podrán denunciar las transgresiones a ésta ley, si se tratase de los jueces, a los cuerpos encarrados de acusar, los o de juzgarlos, y si se tratase de los defensores o asesores de menores, a los funcionarios con facultad para controlarlos o removerlos.

**Art. 25.** — Comuníquese al poder ejecutivo.

Dado en la cámara de diputados, en Buenos Aires, a 23 de agosto de 1919.

ARTURO GOYENECHE.  
Carlos G. Bonorino.

**Sr. Presidente.** — Está en discusión en general.

**Sr. Roca.** — Pido la palabra.

El asunto que está a consideración de la honorable cámara y que ha despachado la comisión de legislación, merecería, sin duda, señor presidente, un informe de una extensión y de una importancia que no es compatible con el apremio con que el senado tiene que trabajar en estas sesiones finales del período ordinario.

Habría sido necesario que la comisión de legislación expresara en una forma minuciosa y completa, todos los antecedentes que han determinado la sanción del proyecto que viene en revisión de la cámara de diputados y que son la expresión de una larga tramitación en el seno del mismo cuerpo. La ley de patronato de menores, iniciativa del señor diputado por Buenos Aires, doctor Luis Agote, fué objeto de diversos despachos de la comisión de legislación, sin tener la fortuna de lograr ninguno de ellos ser considerado por la cámara de diputados, por circunstancias ajenas a la significación del asunto, y a la urgencia de los intereses que estaba destinado a tutelar.

Después de varios años de tramitación, y aprovechando la experiencia adquirida en el transcurso del tiempo, como lo expresó el propio autor del proyecto, al fundarlo por última vez ante la cámara de diputados, ha conseguido ser sancionado por la cámara de diputados el articulado de esta ley. Ella viene abonada por la eficiente y autorizada colaboración de altos funcionarios judiciales, y administrativos capacitados por sus funciones públicas a los problemas que la ley tiende a resolver, y por la propia aptitud para tratarlos con el suficiente conocimiento y preparación que han acreditado, en primer término, el autor del proyecto, y en segundo lugar los miembros de la comisión de legislación de la cámara de diputados.

Si hubiera de hacerse, señor presidente, un acto de estricta justicia, habría que recordar, al propiciar la sanción de este proyecto de ley, dos nombres, el del señor doctor Luis Agote, que acabo ya de nombrar como autor

del proyecto inicial y como campeón infatigable de la obra que él comportaba, y el del doctor Ricardo Seebert, vocal de la cámara de apelaciones en lo criminal, que ha consagrado al asunto una dedicación verdaderamente apasionada y que dió en su hora la gran campanada de alarma, un interesante informe, que fue publicado en los diarios de la capital, con el que prestó al estudio del problema, con una eficiencia y con una emoción excepcional, un inapreciable aporte.

El proyecto de ley, que está a consideración del senado, tiene por objeto corregir los males que dimanar de la infancia, y de la infancia criminal, en todo el territorio de la nación, y, especialmente, en el de la capital federal. Basta enunciar, señor presidente, la cifra de 15.000 niños, que acusan las estadísticas, abandonados por sus padres y explotados por ellos o víctimas de la lacra de la criminalidad precoz, para darse cuenta de la importancia y de la urgencia del problema que tiene que resolver el congreso de la nación. No solamente lo indica la experiencia de los funcionarios policiales y judiciales, que han tenido oportunidad de apreciar de cerca este interesante problema, sino las estadísticas mismas, que acusan que una gran parte de la criminalidad, llega a decirse, que hasta el 90 por ciento, está reclutada en este medio de la infancia abandonada.

Es natural, pues, que no solamente la naturaleza de los males mismos que trata esta ley de corregir, sino la experiencia ajena y los ejemplos de legislaciones más adelantadas que la nuestra en los estudios de estas cuestiones, hayan determinado la preparación de este articulado, que tiende a resolver todos los conflictos y todas las cuestiones que ha suscitado la protección de la niñez.

Afrontado el problema en su entraña misma, se propone la reforma de código civil no sólo en lo que se refiere a la institución de la patria potestad y de la tutela sino que se modifiquen las leyes penales y de forma, en cuanto puedan tener relación con los niños criminales y con los institutos

que se ocupan de la protección de la infancia.

Ha empezado la ley por modificar, en una forma que considero acertada y juiciosa, las disposiciones fundamentales del código civil que establecen las características de la patria potestad, la forma en que ella se acaba, se pierde, o se suspende, tratando de armonizar las disposiciones, algunas un poco anticuadas, de nuestro código civil con las soluciones que el ambiente reclama.

Para sustituir la autoridad de los padres en los casos en que la pierden se estatuye en esta ley, el patronato del estado nacional o provincial, según los casos y se reglamenta su ejercicio. Las disposiciones al código civil que se refieren a la forma de nombramiento de tutores, a la remoción de los mismos, y a las funciones que los defensores de menores deben ejercitar, son también objeto de una minuciosa revisión, tendiendo a armonizar las disposiciones de la ley con los objetivos a que he hecho referencia.

A la vez, esta ley introduce modificaciones sustanciales en lo que se refiere a las funciones de los jueces del crimen y correccional, estableciendo normas que definen las funciones de estos tribunales en todos los casos en que intervienen los menores. Una de las reformas más interesantes y más eficaces que ha de contener la presente ley, es aquella que acuerda la facultad a los jueces de la jurisdicción criminal y correccional de disponer preventivamente de los menores que se encuentran moral y materialmente abandonados, cuando lleguen hasta su jurisdicción y que suspende, a la vez, las disposiciones legales relativas a la prisión preventiva, a fin de que no sean llevados los menores a los centros donde sufren esta situación los profesionales del delito y donde los menores no hacen sino exponerse a todos los peores contagios de carácter moral.

La ley tiende, señor presidente, a preparar la sanción de la legislación penal de menores, y a la institución de los tribunales de menores, a semejanza de lo que ocurre en naciones mucho más adelantadas que la nuestra, y si

ella no ha sido incorporada a esta ley, ha sido por temor de dar un salto demasiado brusco, prefiriéndose en cambio llegar a la reforma por los medios de transición que comporta lo sancionado por la cámara.

El estudio minucioso de las disposiciones de la ley me llevaría a hacer una exposición que excedería de los límites estrictos en que he querido encerrar los fundamentos del despacho de la comisión, y en la seguridad de que si alguna objeción fuera formulada por los señores senadores, ella procedería en la discusión en particular del articulado de la ley.

Pero, como expresión de mi experiencia y conocimiento personal de este asunto, en el que he intervenido durante dos o tres períodos parlamentarios en la cámara de diputados, como miembro de la comisión de legislación, subscribiendo los anteriores despachos que aquella comisión expidiera, y con el conocimiento de la forma en que ha sido elaborado este proyecto y de la intervención que en él han tenido autoridades respetables y que son una garantía del criterio con que han sido proyectadas las modificaciones a las leyes de fondo, y de la opinión favorable en el mismo sentido de mis colegas de comisión, no vaciló, señor presidente, en aconsejar al senado la sanción de esta ley que es reclamada con urgencia, que atiende males sociales de indiscutible gravedad y que no solamente reviste los caracteres de una ley de higiene y previsión social, sino también los de una ley honda y humana piedad.

He dicho. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

**Sr. Presidente.** — Se va a votar en general el despacho de la comisión.

—Se vota y aprueba.

—Se lee el artículo primero.

**Sr. Patrón Costas.** — Hago indicación, señor presidente, para que todo artículo que no sea observado se de por aprobado.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente.** — Habiendo asentimiento así se procederá.

—Sin observación se leen y aprueban los artículos 1, 2 3, 4, 5, 6 y 7.

—Se lee el artículo 8.

**Sr. Roca.** — Pido la palabra.

Deseo, a propósito de este artículo, expresar que la señora presidenta de la sociedad de beneficencia me hizo saber, oportunamente, que la institución que preside había encontrado que este artículo era susceptible de algunas observaciones en el sentido de que era un poco excesivo el otorgamiento de la tutela, de una manera definitiva, a la sociedad de beneficencia o a los establecimientos privados de beneficencia en que fueran colocados los menores, por razón del peligro de que eso fuera a alejar a muchos padres de la idea de colocar a los menores en dichos establecimientos, y porque podría significar una pena demasiado severa o una condición demasiado dura para los mismos, indicándome la señora presidenta de la sociedad de beneficencia la conveniencia de hacer una modificación a este artículo en el sentido de que esa tutela se hiciera definitiva sólo después de dos años de ejercitada por la sociedad de beneficencia, cuando los padres no hubieran cumplido con la obligación contraída con la sociedad en el acto de la entrega de los menores.

No obstante, señor presidente, de encontrar que esta observación podría tener fundamentos serios, he entendido, y la comisión comparte mi opinión, que los peligros enunciados no son tan inmediatos, ni son tan graves, desde que estará confiado al reposado criterio de la sociedad de beneficencia el ejercicio de las atribuciones que esta ley confiere, y desde que es preferible esperar la experiencia de la misma ley para conseguir, ante sus resultados, la suficiente información, a fin de proyectar una reforma a las prescripciones de este artículo.

Con estas palabras he querido dejar expresadas públicamente las observaciones expuestas a este artículo, y

también el criterio con que la comisión de legislación insiste en la redacción del artículo 8, tal como viene proyectado.

Nada más.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar.

—Se vota el artículo en discusión y resulta afirmativa.

—Se aprueban sin observación los artículos 9 al 24.

—El 25 es de forma.

**Sr. Presidente.** — Queda sancionado.

7

## VENIAS PARA DEMANDAR

### A LA NACION

—Se lee:

*Honorable senado:*

La comisión de negocios constitucionales ha estudiado el proyecto de ley en revisión, acordando venia para demandar a la nación a don Alfredo Bertelli.

Manifiesta el solicitante que ha prestado servicios como cirujano de la armada durante tres años y veinte y nueve días y que fué dado de baja en virtud de informe médico presentado por el jefe de la Sanidad de la armada que lo declaraba inutilizado para el servicio.

Que considera que el estado militar sólo puede perderlo de acuerdo con la ley orgánica de la armada, a su solicitud o por condena de los tribunales.

Que ha hecho las reclamaciones administrativas correspondientes sin obtener el reconocimiento de su derecho.

Por estas consideraciones la comisión aconseja la sanción de dicho proyecto de ley.

Buenos Aires, septiembre 23 de 1919.

*J. V. González. — P. A. Garro.*

### PROYECTO DE LEY

*El senado y cámara de diputados de la Nación Argentina, etcétera.*

Artículo 1.º — Acuérdase a don Alfredo Bertelli la venia que solicita para demandar a la nación.

Art. 2.º — Comuníquese al poder ejecutivo.

Dado en la cámara de diputados, en Buenos Aires, a 10 de septiembre de 1919.

*ARTURO GOYENECHE.  
Carlos González Bonorino.*

**Sr. Presidente.** — En discusión en general.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—En particular es igualmente aprobado.

—Se lee:

*Honorable senado:*

La comisión de negocios constitucionales ha estudiado el proyecto de ley en revisión acordando venia al señor Agustín Arroyo para demandar a la Nación.

Manifiesta el señor Arroyo que en el año 1917 solicitó su jubilación como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en el Perú y que el poder ejecutivo al acordarla dispuso que fuera abonada en moneda nacional de curso legal y no en la cantidad equivalente de esta moneda al sueldo en oro que percibía por la ley de presupuesto.

Que ha recurrido ante el poder ejecutivo solicitando la reconsideración de aquel decreto y que su pedido ha sido desestimado.

Por estos antecedentes la comisión aconseja la sanción de dicho proyecto de ley.

Buenos Aires, septiembre 23 de 1919.

*J. V. González. — P. A. Garro.*

### PROYECTO DE LEY

*El senado y cámara de diputados de la Nación Argentina, etcétera.*

Artículo 1.º — Acuérdase a don Agustín Arroyo la venia que solicita para demandar a la Nación.

Art. 2.º — Comuníquese al poder ejecutivo.

Dado en la cámara de diputados, en Buenos Aires, a 10 de septiembre de 1919.

*ARTURO GOYENECHE.  
Carlos G. Bonorino.*

**Sr. Presidente.** — En discusión en general.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular es igualmente aprobado.

*Honorable senado:*

El señor Manuel Ramírez Sanguinetti se ha presentado solicitando venia para demandar a la nación.

Manifiesta el peticionante que ha sido empleado durante más de veinte y cinco años, prestando servicios en los ferrocarriles del estado y en la dirección general de correos y telégrafos.

Que en agosto del año 1913, solicitó la jubilación que le correspondía por los ser-